

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA DE DECISIÓN LABORAL**

El seis (06) de octubre de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **CARMEN ALICIA PÉREZ GARCÍA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** (en adelante PROTECCIÓN S.A.) en el que se vinculó como litisconsorte necesario por pasiva a la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** (en adelante PORVENIR S.A.), tramitado bajo el radicado No. **05266-31-05-001-2020-00041-01**.

**AUTO:**

De conformidad con el memorial de sustitución de poder, allegado vía correo electrónico junto con los alegatos de conclusión de segunda instancia por parte de la sociedad **GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.** quien representa judicialmente los intereses de PORVENIR S.A. en este proceso, se procede a reconocer personería a la abogada **MARÍA ALEJANDRA RAMÍREZ OLEA** identificada con C.C. No. 1.152.225.557 y portadora de la T.P. No. 359.508 del C.S de la J, para que represente a PORVENIR S.A en este proceso como apoderada sustituta.

En memorial allegado a través de correo electrónico, el abogado **FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI**, quien funge como representante legal de la sociedad **PALACIO CONSULTORES S.A.S.**, presenta renuncia al mandato conferido por COLPENSIONES. Teniendo en cuenta que con dicho escrito adjunta las constancias mediante las cuales se evidencia que la entidad está enterada de dicha decisión y que con ello se cumple lo estipulado en el artículo 76 del CGP, se acepta la renuncia al poder presentada por **FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI**, en calidad de representante legal de la sociedad **PALACIO CONSULTORES S.A.S.**

De igual forma, de conformidad con el memorial de sustitución de poder, allegado vía correo electrónico junto con los alegatos de conclusión de segunda instancia por parte de la sociedad **CAL & NAF ABOGADOS S.A.S**, quien representa judicialmente los intereses de COLPENSIONES en este proceso, se procede a reconocer personería a la abogada **NATALIA ECHAVARRÍA VALLEJO** identificada con C.C. No. 43.905.350 y portadora de la T.P. No. 284430 del C.S de la J, para que represente a COLPENSIONES en este proceso como apoderada sustituta.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

### 1. ANTECEDENTES:

La demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare nula o ineficaz la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (en adelante RAIS) que realizó en la AFP PROTECCIÓN S.A., se declare que es beneficiaria del régimen de transición, teniendo derecho a pensionarse con los beneficios del Decreto 758 de 1990 con un monto del 90%; y en consecuencia, se condene a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES todos los valores recibidos con motivo de la afiliación y, condenar a COLPENSIONES al retroactivo pensional correspondiente a la diferencia entre la mesada que tiene causada con esta entidad desde el 25 de agosto de 2010.

**Como fundamento fáctico de sus pretensiones** relata la actora que el 25 de agosto de 2010 le fue reconocida la pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales – hoy COLPENSIONES.

Indica que se afilió al ISS a partir del 23 de abril de 1982 –hoy COLPENSIONES–, trasladándose a PROTECCIÓN S.A. el 1° de noviembre de 1999 y regresando a COLPENSIONES el 1° de marzo de 2004.

Manifiesta que el asesor de PROTECCIÓN S.A. le realizó la afiliación sin advertir las consecuencias respecto del régimen de transición del cual era beneficiaria, pues de haber permanecido en el RPM, tendría derecho a pensionarse con el Decreto 758 de 1990 a los 55 años de edad con 1000 semanas y un monto del 90% del promedio de lo cotizado en toda su vida laboral o los últimos 10 años de cotización.

Afirma que se trasladó a la AFP ING – hoy PROTECCIÓN- sin que se le brindara información veraz, ofreciéndosele que lograría pensionarse a más temprana edad, que su mesada pensional podría ser más alta y con el argumento de que el ISS iba a desaparecer, siendo desinformada en cuanto al derecho que tenía respecto al beneficio del régimen de transición de continuar en el RPM, informándosele sobre las aparentes ventajas pero omitiendo indicar las consecuencias negativas y específicas de abandonar el RPM, limitándose a firmar un formato con preguntas preestablecidas para todos los aspirantes.

Informa que el 10 de octubre de 2019 le solicitó a COLPENSIONES ser reconocida como beneficiaria del régimen de transición y reliquidar su mesada pensional de manera retroactiva conforme al Decreto 758 de 1990, contestándosele que en caso de no estar de acuerdo con el acto administrativo por el cual se resolvió su pensión y agotados los recursos de reposición y apelación, se debía hacer un nuevo estudio con los documentos que considerara pertinente radicar.

## **2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:**

El *a quo* accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia del traslado de la demandante al RAIS y condenando en consecuencia a las AFP PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES, el porcentaje cobrado por gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, todo lo anterior, debidamente indexado con cargo a sus propios recursos, durante el tiempo que la demandante estuvo afiliada a dichos fondos. Ordenó igualmente, remitir a COLPENSIONES la relación discriminada de los conceptos, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los índices base de cotización –IBC-, aportes y demás información relevante que los justifiquen, todo lo anterior dentro del término de treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta Sentencia. Igualmente, le ordenó a COLPENSIONES recibir los dineros trasladados, para los fines pensionales y prestacionales a que hubiere lugar, declaró no probada la excepción de prescripción y condenó en costas a PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., en favor de la demandante, fijando agencias en derecho a cargo de cada una de ellas en la suma de \$3.480.000.

Para arribar a la anterior decisión, el *a quo* argumentó, que la Corte Suprema de Justicia tiene fijada una línea jurisprudencial sobre el tema de la afiliación a un régimen pensional y se sintetiza en la obligación de brindar una información completa,

suficiente, idónea y comprensible sobre las características de los regímenes pensionales, determinando e informando la conveniencia e inconvenientes de uno y otro régimen, y la inversión de la carga de la prueba de la información brindada en cabeza de la AFP; quedando establecido que el deber de información no se acredita con la sola suscripción del formulario de afiliación, pues la firma voluntaria de dicho documento lo que evidencia es que el consentimiento estuvo libre de vicios, pero no implica que el mismo haya sido informado, sin ser suficiente tampoco que las afirmaciones consignadas en esos formatos pre impresos, para demostrar dicho deber de información.

Señaló que en el proceso no se probó por parte de PROTECCIÓN S.A. que, al momento de la afiliación de la demandante, haya cumplido con el deber legal de otorgar una explicación integral sobre la regulación de los regímenes pensionales, las ventajas y desventajas; aspectos que tampoco fueron demostrados por PORVENIR S.A., resultando insuficiente como prueba de la existencia de un consentimiento suficientemente informado la suscripción del formulario de afiliación preimpreso.

Manifiesta que, escuchado el interrogatorio de parte, no tiene incidencia alguna el que la demandante dijera que la motivación para demandar fuera económica, pues en estos casos lo que se analiza es la falta del deber de información, sin que tampoco tenga incidencia el traslado horizontal en otros fondos del RAIS, ya que en estos casos no se aplica la teoría de los actos de relacionamiento.

En el caso de la actora quien regresó a COLPENSIONES, encontrándose ya pensionada desde el año 2010, ya han existido pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, precisando que el hecho de estar la persona pensionada en el RPM, no es un impedimento para demandar y declarar la ineficacia del cambio de régimen pensional, siendo diferente cuando la persona está pensionada en el RAIS, pues en estos casos no hay lugar a declarar las consecuencias de la ineficacia, salvo los perjuicios que se demuestren.

En cuanto a la pretensión de reliquidación de la pensión de vejez en aplicación del régimen de transición, adujo a juez, que no procede lo solicitado al constatarse que en la Resolución 344G del 30 de agosto de 2010, expedida por el Hospital General de Medellín, se indica que la demandante ostentaba la calidad de auxiliar de enfermería y en estos casos, al ser una empleada pública, cualquier conflicto referente a su pensión, la jurisdicción competente es la contencioso administrativa.

Señaló que la declaratoria de ineficacia por ser una pretensión meramente declarativa, es imprescriptible y los derechos que nacen de aquella tienen igual connotación al formar parte del derecho irrenunciable a la seguridad social; quedando las demás excepciones implícitamente resueltas.

### **3. DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN:**

La sentencia fue apelada por los apoderados judiciales de PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., con los siguientes argumentos:

#### **APELACIÓN DE PORVENIR S.A.**

Manifiesta que la afiliación de la demandante fue completamente válida, precedida de una asesoría con clara, expresa, oportuna y con toda la información pertinente y necesaria, sin que se den los supuestos necesarios para declarar la ineficacia de la afiliación, pues se evidencia que la demandante durante el tiempo de vinculación a este régimen tuvo las posibilidades de conocer las características y condiciones, destacándose su decisión voluntaria de trasladarse siempre en administradoras dentro del RAIS, lo que demuestra el querer permanecer en el mismo régimen, y que equivale a una revalidación de sus intereses de pensionarse bajo esta regla.

Si bien es cierto que existe línea jurisprudencia sobre la ineficacia de los actos de traslado por faltas al deber de información, solo puede aplicarse de manera diferenciada según los supuestos fácticos de los que se exige una similitud que no se da en el presente caso, ya que la demandante se afilió libre, voluntaria e informada y con todo el sustento de las cargas impuestas por la ley para ese momento.

Lo que se le reprocha a la AFP, atenta contra el principio de la irretroactividad y de la seguridad jurídica, pues se cumplió con el deber de información consagrado en la Ley 100 de 1993 y así mismo, se recuerda que para la data de la afiliación no existía la obligación del deber de reasesoría o buen consejo.

Manifiesta que, en este caso, la única motivación para declarar la ineficacia, se deriva del monto de la mesada, factor que por sí solo no es suficiente para probar la falta de deber de información ni para ser considerado como elemento la voluntad de la actora, en tanto las prestaciones que se reconocer en uno y otro régimen son sustancialmente diferentes.

Expone que respecto de las sumas correspondientes a los gastos de administración contenidas en el artículo 20 de la Ley 100, no deben ser trasladadas, ya que, durante el periodo de afiliación, la AFP ha cumplido con la finalidad de proporcionarle a los afiliados el aseguramiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte y fueron debidamente invertidas como lo exige la ley. La Superfinanciera ha indicado que en estos casos se debe respetar las restituciones mutuas, no se debe ordenar el traslado de las primas de seguros, ni tampoco de la devolución de cuotas de administración pues han sido utilizadas para generar rendimientos en la cuenta de los afiliados y en caso de la demandante fueron invertidas mientras estuvo afiliada con PORVENIR S.A. Conforme el artículo 1746, era necesario autorizar el descuento de las restituciones mutuas a que hubiere lugar independiente del motivo que da lugar a la ineficacia. Al fondo se le deben reconocer los gastos de administración que ha hecho a favor de los afiliados ya que la AFP administra unos recursos aumentados teniendo derecho a una compensación económica y no un traslado plano de los recursos hacia COLPENSIONES. No ordenar las restituciones mutuas, ni las compensaciones económicas, conlleva a un enriquecimiento sin justa causa a favor del régimen de prima media. Insiste en que el tema de las restituciones mutuas ha sido decantado y es procedente únicamente respecto de quienes ostentan la calidad de afiliados, por lo que no es aplicable a este caso pues debe ser abordado desde la óptica de la ineficacia del traslado y en el caso de personas con estatus de pensionado, no es igual y para eso se remite a la sentencia SL373 de 2021, donde la corte se pronuncia en un caso similar.

Alega que en lo que respecta a devolver conjuntamente rendimientos y gastos de administración, se aparta pues la misma corte ha indicado que de aplicarse la consecuencia de la ineficacia, el negocio no se ha celebrado jamás y en ese sentido, se tendría que los frutos dados por la administración de los recursos, tampoco se habría generado.

Alega, que no es posible condenar a la indexación de los valores ordenados a trasladar, dado que dicho detrimento que sufre el valor económico de los aportes se resarce con el traslado de los rendimientos por lo que de hacerlo se estaría imponiendo una doble condena en contra de PORVENIR S.A, permitiendo un enriquecimiento sin justa causa de COLPENSIONES, además que en el caso de la demandante, ya todos los dineros obrantes en su cuenta de ahorro individual, fueron trasladados en su momento al RPM.

Finalmente, manifiesta respecto a las costas, PORVENIR S.A. no fue la AFP inicial y actuó conforme la buena fe objetiva.

Finalmente, manifiesta que la demandante es pensionada, por lo tanto, su derecho está consolidado y ratificó su voluntad de pertenecer al RPM, cumpliéndose así con el deber de información, y además, los gastos de administración ya no reposan en las cuentas de PORVENIR, y, en cuanto a la indexación, en su momento se devolvió todo a COLPENSIONES, incluyendo rendimientos, por lo que no es procedente esta condena.

#### **APELACIÓN PROTECCIÓN S.A.**

Solicita se revoque la condena de trasladar a COLPENSIONES los dineros correspondientes al porcentaje cobrado por gastos de administración, primas de reaseguros previsionales, aportes al fondo de garantía de pensión mínima, con su respectiva indexación, pues en este caso hay una situación particular y es que la demandante ya tiene una situación jurídica nueva que convalida lo que puede haber generado una ineficacia, como lo habla en reciente jurisprudencia en la que se señala que cuando se solicita la prestación de vejez ante la administradora de pensiones, y además se tiene un disfrute de la misma, la falta de información en el traslado inicial entre regímenes pensionales se refrenda o quedaría invalidada.

Indica que estamos ante un pensionado y no un afiliado, por lo tanto, el trato es diferente; la demandante manifestó en el interrogatorio de parte que es pensionada desde el año 2010, habiendo pasado más de tres años, por lo que prescribe cualquier inconformidad o solicitud adicional respecto al monto de su mesa pensional, toda vez que cuando se le pagó la misma y se presentó solicitud para acceder a dicha prestación, ya se estaba aceptando las condiciones en que se iba a pagar en este caso, por parte de COLPENSIONES.

#### **4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:**

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, los apoderados de la demandante, PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, allegaron escrito de alegaciones, en los que señalaron resumidamente lo siguiente:

#### **ALEGATOS DE LA DEMANDANTE.**

La honorable Corte Suprema de Justicia ha construido una jurisprudencia contundente sobre el **consentimiento informado** frente al deber que tienen los Fondos Privados de responsabilidad social y empresarial de suministrar toda la información adecuada, completa, precisa y transparente en relación con las consecuencias positivas y negativas para la toma de la decisión tan importante como es el traslado del Régimen de Prima Media con prestación definida al del Régimen de Ahorro Individual con solidaridad, y su **expectativa legítima de aplicación del mismo por ser más favorable**.

Dicha línea jurisprudencial se puede apreciar en especial en las sentencias 31314 del 9 de septiembre de 2008 M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón; 31989 del 9 de septiembre de 2008 M.P. Eduardo López Villegas; 33083 del 22 de noviembre de 2011 del M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón; SL 12136-2014, radicación 46292 del tres de septiembre de 2014, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón, SL12136 - 2014 del 3 de septiembre del 2014. En igual sentido se han pronunciado los Tribunales Laborales como por ejemplo el Tribunal Superior de Medellín en sentencias del 25 de febrero de 2013, radicado 2012-545; del 17 de febrero de 2014 en proceso 2013-0263; del 18 de marzo de 2015 radicado 201-980; del 8 de abril de 2015, radicado 2013-446; del 24 de junio de 2015, radicado 2013-702; del 14 de junio de 2016 radicado 2015-626; del 22 de febrero de 2016, radicado 2014- 1528; del 29 de febrero de 2016, radicado 2015-1020. indicó que las administradoras de pensiones tienen el deber de gestión de los intereses de quienes a ella se vinculen, deberes que surgen desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de su afiliación, suministrando información que resulte confiable a los ciudadanos que les van a entregar sus ahorros y seguros de previsión, teniendo entonces esta una responsabilidad profesional, obligadas a prestar en forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de las instituciones de carácter previsional, siendo medidas con mayor rigurosidad.

Tampoco resulta argumento suficiente para exonerar al fondo privado de las pretensiones que en su contra fueron formuladas, el hecho que la demandante no fuera beneficiaria del régimen de transición y que en ese sentido ningún perjuicio haya implicado su traslado, porque LO QUE SE PROTEGE EN ESTOS EVENTOS NO ES SOLO LA CONSERVACIÓN DE LOS BENEFICIOS TRANSICIONALES SINO LA GARANTÍA DE HABILITAR LA TOMA DE DECISIONES A PARTIR DE UN CONOCIMIENTO PRECISO SOBRE LOS MODELOS A ELEGIR.

Es decir, cualquiera que sea el caso, trátase o no de beneficiario del régimen de transición, corresponde al Fondo brindar la información suficiente que ilustre al afiliado



respecto a las consecuencias del traslado que pretende concretar y no sólo ofrecer aquella que se limite a dar cuenta de los beneficios y bondades del RAIS.

## **ALEGATOS PORVENIR S.A.**

### **1. LA INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN EN LOS PENSIONADOS:**

Lo primero que hay que indicar en el presente proceso es que nos encontramos frente a una persona que tiene un derecho consolidado, pues Colpensiones le reconoció la prestación económica por vejez desde el año 2010 a la demandante, motivo por el cual nos encontramos frente a una persona que cuenta con una situación jurídica consolidada que no es posible retrotraer. En virtud de lo anterior, debemos remitirnos a la sentencia de unificación con radicado 05-001-31-05-007 2015-01295-01 del Tribunal Superior de Medellín, y a la sentencia SL373-2021 del diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021) de la Corte Suprema de Justicia, en la cual manifiesta que no procede la ineficacia de un pensionado.

### **2. LA IMPROCEDENCIA DEL TRASLADO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, SEGUROS PREVISIONALES Y LOS APORTES AL FONDO DE GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA:**

Frente al numeral segundo de la sentencia de primera instancia, es necesario resaltar que las sumas correspondientes a los gastos de administración tienen por mandato legal una destinación específica que, se encuentra en el artículo 20 de la ley 100 de 1993, destinando así el 10% del IBC a las cuentas de ahorro individual, el 0,5% al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS, y el 3% restante a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

En el presente caso, es claro que dichos descuentos, han cumplido plenamente con su cometido y no se encuentran en el patrimonio de la AFP, pues se destinaron a cubrir los gastos en que incurrió Porvenir S.A. durante el tiempo de afiliación con el fondo, para la generación de frutos o rendimientos que se reflejaron de forma positiva en la cuenta de la hoy pensionado y que en su momento se destinaron al cubrimiento de los riesgos de invalidez y muerte.

Atenta contra toda lógica jurídica la declaratoria de un enriquecimiento sin justa causa debido a la inaplicación de las normas legales que regulan las restituciones mutuas derivadas de una nulidad o ineficacia de un acto jurídico ordenando devolver o restituir

un bien, en este caso una suma de dinero depositada, sumas que invirtió para el mantenimiento de dicho bien e incrementarlo.

Por si lo anterior no fuera poco, se recuerda que la inversión de dichos gastos de administración en seguros previsionales y en la generación de rendimientos, no se dio de manera antojadiza, sino por el contrario se dio de acuerdo con el mandato legal establecido en el artículo 20 de la ley 100 de 1993 y a la obligatoriedad de la garantía de rentabilidad mínima establecida en el literal e) del artículo 60 de la ley 100 de 1993.

Toda decisión judicial de traslado de régimen pensional, debe tener como objetivo constitucional, la estabilidad y sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, por lo que es imperioso en la actualidad, y de acuerdo a la coyuntura económica, hacer un análisis macro de las consecuencias que se derivan de autorizar solicitudes de traslados que no cuentan con los requisitos para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, tal y como se estudió por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en sala extraordinaria del 14 de agosto de 2019 a las 2 PM en virtud de lo establecido en el artículo 35 del CGP donde decidió unificar su jurisprudencia, en sentencia dentro del proceso del proceso 05001310500720150129501 negando las ineficacias de traslado en la afiliación, con base en la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

### **3. FRENTE A LA CONDENA EN COSTAS:**

En relación con la condena en costas debemos indicar que mi representada siempre obró con buena fe objetiva, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para la época, sumado a que mi defendida siempre ha buscado el beneficio de la parte demandante, por lo que la condena en costas no es procedente ante la ausencia de mala fe de mi representada.

### **ALEGATOS DE COLPENSIONES.**

En cumplimiento a la Ley 797 de 2003, artículo 2o, literal E:, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.

Por otra parte, es necesario que se tenga en cuenta que solo podría la anulación del traslado efectuado hacia la Administradora de Fondos de Pensiones AFP y su retorno al Régimen de prima media, si:

- a) Su firma ha sido falsificada en el contrato de afiliación, situación en la cual debe instaurar la respectiva acción penal por la presunta falsificación en documento (público o privado) ante la fiscalía general de la Nación con el fin de determinar la

veracidad o falsedad del documento, de conformidad con lo establecido en el Título IX Capítulo III de la Ley 599 de 2000 referente a los delitos contra la fe pública, en especial a la falsedad en documentos. Una vez la autoridad competente se pronuncie sobre el asunto, el ciudadano o la AFP respectiva podrán solicitar la anulación del traslado diligenciando los formularios de la Entidad y allegando copia del respectivo informe grafológico.

b) El empleador lo afilió sin su consentimiento: El formulario de afiliación no fue firmado por el afiliado.

c) Traslado de Régimen por sentencia SU 062 de 2010: en el cumplimiento de las condiciones y requisitos señalados.

Es cierto que para la fecha de traslado la demandante plasmó su firma en el formulario y siendo este una persona legalmente capaz, debe entenderse que este aceptó cada una de las condiciones ofrecidas, en consecuencia, no es dable años después venga a mostrar su inconformidad, más aún cuando tuvo la posibilidad de tener re-asesoría por parte del fondo privado que demuestra haber estado de acuerdo y satisfecho con lo que ese fondo privado le ofrecía.

Ahora, frente a las múltiples afectaciones al Sistema General de Pensiones en reciente pronunciamiento la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia razonó que no es posible revertir ciertos efectos económicos como el deterioro que sufre el capital que ya ha sido objeto de pago a través de mecanismos de financiación como los bonos pensionales y las cuotas partes de entidades contribuyentes, como consecuencia ineludible del pago de mesadas pensionales. En efecto, es irreparable la pérdida de integridad del músculo financiero con que se respalda el pago de la prestación, por lo que forzar a través de una ficción jurídica la vuelta al estado anterior en que se encontraba las cosas, va en detrimento de los recursos de la Seguridad Social, bien sea que provengan de la Nación y/o demás entidades que deben contribuir al financiamiento del pasivo pensional. Sumado a lo anterior, se torna inviable la realización de los efectos de la ineficacia, por cuanto no es posible cesar los efectos jurídicos de las operaciones, contratos y actos que involucran a terceros como aseguradoras, entidades oficiales e inversiones, que según la modalidad pensional en que se encuentre el actual pensionado, hayan concurrido en la administración y gestión del riesgo financiero, entre otras muchas problemáticas de orden financiero, que ocasionarían un déficit económico entre los actores del Sistema que han confluído en la gestión de los recursos a través de relaciones jurídicas válidamente suscitadas en el mundo jurídico del Sistema General de Pensiones, en cumplimiento de obligaciones y deberes contractuales que ya se encuentran consumados y perfeccionados con las consecuencias de orden legal y financiero que ello acarrea.

Por las razones expuestas solicito señor Magistrado, se revoque el fallo proferido en primera instancia.

## 5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER:

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer si la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es ineficaz y de serlo, en qué términos y condiciones se debe realizar el traslado a COLPENSIONES del importe de las cotizaciones efectuadas en el RAIS por la demandante, que no hayan sido trasladados aún a aquella entidad.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN y de la CONSULTA de la sentencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

## 6. CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelación de PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., se consultará la sentencia en favor de COLPENSIONES en lo que pueda resultarle adversa, por lo que, la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Primeramente, es necesario manifestar que el traslado o afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose además en los Arts. 60 y 114 de esta ley, como en los arts. 10, 12 y 15 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época del traslado del demandante, que el traslado de régimen pensional debe partir de la cabal y completa asesoría que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada, asesoría que ha de entenderse pedagógica, es decir, realmente entendible para cada persona conforme a su grado de cultura y su situación particular, pues los casos no presentan las mismas características o condiciones.

La jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL12136-2014 del 03 de septiembre de 2014, abandonando el concepto de **nulidad** del traslado, precisó que la omisión en la debida asesoría de las AFP al momento del referido traslado lo convierte en **ineficaz**, por violentar la exigencia del literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de que tal manifestación de traslado fuera libre y voluntaria y contempló, que de no ser así, la afiliación respectiva

quedaría sin efecto y podría realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

Tal posición, que constituye a la fecha la línea jurisprudencial de la SCL de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho tema, ha sido ratificada de manera reiterada en todos los pronunciamientos emanados de dicha corporación, como en las sentencias SL1688-2019 y SL1689-2019, ambas proferidas el 8 de mayo de 2019, en las que, además la Corte fijó unas conclusiones jurisprudenciales en torno al tema de la ineficacia o nulidad de traslado de régimen, las que se resumen de la siguiente manera:

1. Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. primeramente, con un deber de información necesaria (en vigencia del decreto 663 de 1993), luego de asesoría y buen consejo (en vigencia de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010), y finalmente de doble asesoría (en vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015)
2. La simple constancia del consentimiento informado vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acredita un consentimiento, pero no que haya sido informado.
3. La carga de la prueba de demostrar que el afiliado recibió la información debida, veraz y suficiente cuando se afilió, le corresponde a la AFP.
4. El precedente de la CSJ en torno a la ineficacia del traslado no aplica sólo a los casos en que el afiliado se cambia de régimen pensional a pesar de tener consolidado un derecho pensional, o contar con una expectativa pensional o derecho a la transición del art. 36 de la ley 100 de 1993, sino en todos los casos de incumplimiento del deber de información.

En el presente asunto, está probado, que la accionante, estando afiliada al régimen pensional de prima media administrado por el ISS, hoy COLPENSIONES, según historia laboral (carpeta 03ArchivoAdministrativo2020041 archivo GRP-SCH-HL-66554443332211\_1186-20180314010050), se afilió a la administradora del RAIS COLMENA –hoy PROTECCIÓN S.A.- el 29 de septiembre de 1999, con efectividad al 1° de noviembre de la misma anualidad como se extrae del formulario de afiliación y certificado SIAFP aportados por PROTECCIÓN S.A. en la contestación (folios 52 Y 54 archivo 05ContestacionProtección2020041). De este certificado SIAFP, se desprende que posteriormente se trasladó a la AFP PORVENIR S.A. el 17 de abril de 2001, con

efectividad al 1° de junio de 2001, lo cual se acredita también con el respectivo formulario de afiliación a esta AFP (folio 57 archivo 18ContestaciónPorvenir).

Ahora, en el historial de vinculaciones que registra el SIAFP se observa que la demandante retornó al RPM administrado por COLPENSIONES el 28 de enero de 2004. Igualmente, el extinto ISS, por medio de la resolución 024539 del 19 de septiembre de 2011 le concedió la pensión de vejez a la actora, a partir del 25 de agosto de 2010, (folios 97 a 100 archivo 01ExpedienteEscaneado).

Sobre el deber de información antes citado, en el interrogatorio de parte que fue absuelto por la demandante, el cual se encuentra grabado a partir del minuto 00:31:06 del video de la audiencia de conciliación, trámite y juzgamiento, no confiesa que al momento de trasladarse del RPM al RAIS en la AFP COLMENA – hoy PROTECCION S.A.- ni después la AFP PORVENIR S.A., le hubieren brindado toda la información, completa, clara y oportuna que se requería para materializar su afiliación al RAIS, pues no manifiesta que se le haya ilustrado sobre aspectos neurálgicos de los regímenes pensionales, como lo son las características de uno y otro régimen pensional, los requisitos para acceder a las prestaciones económicas en cada uno de ellos, la forma de liquidación de la mesada pensional en cada régimen, entre otros aspectos que resultan necesarios para considerarse que se otorgó una información completa, comprensible y suficiente.

Se pone de presente que el hecho que la demandante haya regresado al RPM de COLPENSIONES y haya obtenido la pensión de vejez, no es óbice para que se declare la ineficacia de traslado que efectuó la RAIS, como lo indicó La Sala de Casación Laboral de la CSJ, en Sentencia SL- 5280-2021, Radicación 85801 del 3 de noviembre de 2021. En el mismo sentido se pronunció la CSJ en la sentencia SL2159-2022, Radicación n.º67556 del 11 de 2022, de manera que no le asiste razón a la apoderada de PORVENIR S.A. cuando en el recurso de apelación argumenta que no es procedente la condena por este hecho.

Respecto de los argumentos expuestos por el apoderado de PROTECCIÓN S.A., al aponerse a la condena alegando que al estar pensionada la demandante, hay una situación jurídica particular, quedando convalidada o refrendada la falta de información en el traslado inicial entre regímenes, debe tener presente que el análisis en estos casos de un pensionado en el RAIS no es asimilable al pensionado en el RPM; por ello, si bien la jurisprudencia de órgano de cierre en materia laboral se ha decantado por la improcedencia de declarar la ineficacia cuando la persona de pensionó en el

RAIS, ello es debido a las implicaciones prácticas que conlleva pero que de manera son extensibles a quienes están pensionados en el RPM, tal como se explica con suficiencia en Sentencia SL3136 de 2022 radicación No 79021.

De otra parte, en lo referente a las **sumas que deben ser devueltas** a COLPENSIONES, encuentra la Sala que, la orden impartida por el *a quo*, en principio se encuentra acorde con la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en dicha materia, sin embargo no existe la debida precisión de los dineros a transferir, pues la juez no hizo mención a la devolución del porcentaje del reaseguro de Fogafín, por lo que se precisa en esta instancia, en el sentido de indicar que la devolución que debe realizar PROTECCION S.A. y PORVENIR S.A. a COLPENSIONES, deberá incluir el valor de los gastos de administración y comisiones, además de los porcentajes que en su momento fueron descontados por dichas AFP de las cotizaciones del demandante y que fueron destinados a pago de primas de seguros previsionales, pago de prima de reaseguro de Fogafín durante el tiempo que legalmente se haya descontado de la cotización y Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sin descuento de ninguna índole, todo lo anterior indexado, pues contrario a lo argumentado por la apoderada de PORVENIR S.A. en su recurso de alzada, al declararse la ineficacia del acto de traslado, **ningún efecto jurídico puede derivarse de este**, como lo ha señalado de manera reiterada la SCL de la CSJ en sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019.

Ahora, la oposición de la recurrente PORVENIR S.A., referente a que no se puede condenar a devolver conjuntamente rendimientos y gastos de administración, carece de todo fundamento en tanto en este caso el *a quo* no está ordenando el traslado de rendimiento alguno, pues, los dineros de la cuenta de ahorro individual actora, se entiende que fueron trasladados a COLPENSIONES cuando ella retornó nuevamente al RPM.

Ha explicado la Corte Suprema de Justicia que las consecuencias prácticas de la ineficacia son idénticas a las de la nulidad, señalando la Sala Civil de la alta Corporación que: *«cualquiera sea la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica (entendida en su acepción general), bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás»* (CSJ SC3201-2018).

En este orden de ideas, como lo dispone el art. 1746 del C.C., norma que regula las restituciones mutuas en el régimen de nulidades: *“La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”*.

En este sentido se pronunció igualmente la SCL de la CSJ, sentencia 31989 de 8 de septiembre de 2008 y lo reiteró en sentencias SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019 y SL1688-2019, en la que precisó:

*“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.*

*“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.*

*“Las consecuencias de la nulidad no pueden ser extendidos a terceros, en este caso, a la administradora del régimen de prima media en el que se hallaba el actor antes de producirse la vinculación cuya nulidad se declara, de modo que no debe asumir por el sistema de pensiones sanciones derivadas de la mora en el pago íntegro del derecho pensional, obligaciones por las que sólo ha de responder a partir de cuando le sean trasladados los recursos para financiar la deuda pensional por parte de la entidad aquí demandada.”*

Teniendo en cuenta lo anterior, al tratarse de la declaratoria de un acto ineficaz que acarrea los mismos efectos de uno nulo, no es dable concebir, so pretexto del principio de la buena fe o de una buena gestión en la administración del bien, que dichas sumas queden por fuera de las restituciones, de un lado, porque se trata de rubros que pertenecen al régimen de prima media con prestación definida, y por ello son necesarios para su funcionamiento, y por otro, porque es la indebida actuación por parte de la AFP demandada, al no proveer la información clara, completa y comprensible a través de sus asesores, que tiene como consecuencia, además del hecho de generar la declaratoria de ineficacia, que deban asumir de su patrimonio los perjuicios que se ocasionen a los afiliados y las sumas sufragadas a terceros, como lo son las aseguradoras previsionales, ello con base en los artículos 2.2.7.4.1 y 2.2.7.4.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, que compiló los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994.



En ilación con lo anterior, y ante la insistencia de la apoderada de PORVENIR S.A. en el recurso de alzada al oponerse a la condena al traslado de los gastos de administración y primeras de seguros bajo el pretexto de que dichos conceptos se utilizaron para generar rendimientos al afiliado, que se deben respetar las restituciones mutuas so pena de un enriquecimiento ilícito a favor del RPM y que como la ineficacia es que el negocio jamás se celebró, tampoco los frutos dados por la administración de los recursos, cabe señalar al respecto que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a las AFP distintas a la que actualmente está afiliado el trabajador, que procedan con el traslado a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación a anteriores AFP, teniendo en cuenta que ello es una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en las sentencias SL 31989 - 2008; SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019, SL 1688 de 2019, rad. 68838 de mayo 8 de 2019, o más recientemente la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667. En esta última dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”* (Resaltado por la Sala).

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos producido dejan de

generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

Además, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado “... *aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...*”.

Dijo además en esa providencia, que:

*“Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal.*

*(...)*

*De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.”*

En lo que refiere al aspecto de apelación de PORVENIR S.A., referente a que no es posible condenar a la indexación de los valores ordenados a trasladar, por cuanto el detrimento económico de los aportes se resarce con el traslado de los rendimientos, de manera que se está imponiendo una doble condena en contra de PORVENIR S.A., debe indicarse que no le asiste razón, por cuanto la indexación ordenada no es respecto del porcentaje de las cotizaciones que fue abonada a la cuenta de ahorro pensional de la demandante, sino de que se predica de los conceptos relativos a los gastos o cuotas de administración, incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro Fogafín durante el tiempo que legalmente se haya descontado de la cotización, y fondo de garantía de pensión mínima, rubros que no ganaron los rendimientos o intereses pues fueron apropiados por PORVENIR S.A. o gastados para los pagos de las primas de seguros.

Ahora, respecto de la afirmación en los alegatos de COLPENSIONES, sobre la imposibilidad de traslado de régimen impuesta por el legislador en el artículo 2 de la ley 797 de 2003 el cual modifico el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, cuando le falten al afiliado menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión de vejez, es palmario que tal prohibición, se aplica en los casos de traslado voluntario, que no es lo que pretende la actora, sino la ineficacia de su afiliación inicial al RAIS.

De otra parte, se afirma en los alegatos de COLPENSIONES, que la declaración de ineficacia del traslado del demandante al RAIS, genera un detrimento pensional al RPM; respecto de lo cual, se ha de manifestar, que para efecto de declarar la ineficacia del traslado del demandante al RAIS, no es jurídicamente viable tener en cuenta el principio de sostenibilidad financiera, pues, desde que el actor estuvo afiliado al RPM era beneficiario de las prerrogativas de este régimen pensional, conforme lo disponía la legislación, y por ello no es posible desconocer los derechos que tiene conforme las norma legales vigentes, so pretexto de someterse al principio de la sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano, principio al que quien se debe someter es el legislador al realizar las reformas pensionales, no que el juez para desconocer derechos ya legislados.

En cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por las demandadas al dar respuesta a la demanda, se tiene que, bajo la óptica jurisprudencial de la ineficacia del traslado de régimen introducido por la SCL de la CSJ, al concluirse que el acto jurídico de traslado de régimen nunca nació a la vida jurídica, no es procedente aplicar la prescripción, conforme puntualmente lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL1689-2019, proferida el 8 de mayo de 2019.

Finalmente, frente al punto de apelación de PORVENIR S.A. respecto a las costas que le fueron impuestas, se ha de manifestar que si bien es cierto el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos, lo cierto es que no fue el actuar de PORVENIR S.A. el que genera la declaratoria de ineficacia del traslado, de régimen pensional, pus conforme a la jurisprudencia de la CSJ, lo que genera la ineficacia, es la omisión en la asesoría en la primera afiliación al RAIS, que en este caso, se produjo a través de la AFP PROTECCIÓN S.A., por lo que a juicio de la Sala, PORVENIR S.A., no debe asumir

las costas del procesales, por lo que se revocará la condena que le fue impuesta a las mismas, para en su lugar abstenerse de imponerle costas.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia apelada y consultada será REVOCADA, CONFIRMADA y PRECISADA en los términos anteriormente expuestos.

COSTAS en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A., por haber sido vencidas en el recurso de apelación. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000 de la que responde cada una por el 50%.

## 7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### RESUELVE:

**PRIMERO: REVOCAR** la sentencia del 29 de mayo de 2023 proferida por el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **CARMEN ALICIA PÉREZ GARCÍA** contra **COLPENSIONES, PORVENIR S.A.** y **PROTECCIÓN S.A.**, en cuanto condenó en costas a PORVENIR S.A., para en su lugar abstenerse de imponerle costas a esta AFP.

Se CONFIRMA la sentencia de primera instancia en todo lo demás, pero PRECISANDO que la devolución que debe realizar PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. a COLPENSIONES, es indexado, el porcentaje de la cotización que no fue consignado en la cuenta de ahorro pensional de la demandante, durante el tiempo que estuvo afiliada a cada uno de estos Fondos de Pensiones.

**SEGUNDO: COSTAS** en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. Las agencias en derecho, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000.

La anterior sentencia se notifica a las partes en **EDICTO**.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cebacbb792772373a6c08dad55e2d857bde0cfa69f2266fc067485be75d1e23c**  
Documento generado en 06/10/2023 02:54:27 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>